



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

SENTENCIA INTERLOCUTORIA

EXPTE. NRO: 4384/2016

AUTOS: “MURO S.R.L. c/ MINISTERIO DE TRABAJO EMP. Y SEGURIDAD SOCIAL s/IMPUGNACION DE DEUDA”

Buenos Aires,

AUTOS Y VISTOS:

Llegan las presentes actuaciones a esta Alzada, en virtud del recurso de apelación obrante a fs. 500/523 contra la resolución dictada por la Dirección Nacional de Fiscalización del MTEySS, obrante a fs. 495/497 que impuso una multa al quejoso, en virtud de las infracciones cometidas al artículo agregado sin número a continuación del artículo 40 de la ley 11.683.

Que notificada de ello, se hizo saber a la rubrada, que la resolución en cuestión agotaba la instancia administrativa y que aquella podía ser recurrida por la vía prevista en el art. 10 inc. b) de la Resolución METySS N° 655/05 y sus modif..

Que a fs. 580, el organismo ministerial ordenó la remisión de los presentes obrados sin informar el cumplimiento del requisito de previo pago de la multa impuesta, en los términos del art. 15 de la ley 18.820 y art. 10, inc b) de la Resolución MTSS 655/2005, a los fines de la apertura de la instancia judicial.

Que no obstante la omisión apuntada, la aquí accionante, en su escrito recursivo, deduce la inconstitucionalidad de la exigencia del “solve et repete”, a la luz – fundamentalmente- de los preceptos que emergen de los tratados incorporados al plexo constitucional a partir de la reforma de 1994 al tiempo que ofrece prueba que daría cuenta de la insuficiencia de recursos para hacer frente a la erogación exigida.

Que, en orden a la cuestión debatida en estas actuaciones, en primer término cabe señalar que el artículo 36 de la ley 25.877 faculta al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a verificar y fiscalizar en todo el territorio nacional, el cumplimiento por parte de los empleadores de la obligación de declarar e ingresar los aportes y contribuciones sobre la nómina salarial, que integran el Sistema Único de la Seguridad Social, sin perjuicio de las facultades concurrentes con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Que contra las resoluciones dictadas en el marco de la norma, el sancionado se encuentra habilitado a recurrir ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, en la forma, modo y plazos fijados en el artículo 9° de la Ley N° 23.473 y sus modificatorias, estableciendo como condición previa para acceder al recurso de apelación el pago de la multa impuesta, conforme lo establecido en el artículo 15 de la Ley N° 18.820 y sus modificaciones.

Que así las cosas en relación al planteo introducido, el Alto Tribunal ha sostenido en reiteradas oportunidades que si bien el art. 15 de la ley 18.820 impone un requisito indispensable para la viabilidad del recurso de apelación, ello no importa una restricción inconstitucional a las garantías de igualdad y de defensa en juicio (Fallos 155:96; 162:363; 235:479; 238:418; 247:181; 261:101; y sus citas: 288:287; 296:57 entre otros), pues existen situaciones que quedan comprendidas dentro de las hipótesis de excepción que la doctrina de aquella así ha considerado: desproporcionada magnitud del monto del depósito con relación a la concreta capacidad económica del apelante, que torna ilusorio su derecho en razón del importante desapoderamiento que podría significar su cumplimiento (CSJN., Fallos 247:181; 250:208 y fallo allí citado; ídem Mussio Hnos S.A. s/Impugnación actas de inspección”, sent. del 25.3.86, y específicamente, dictamen del señor Procurador General de la Nación Argentina del 26/7/85, consid. IV), el supuesto de monto excepcional y falta comprobada e inculpable de los medios para enfrentar su erogación (Fallos 256:38; 261:101), y cuando a través del requerimiento de esta clase de recaudos se revele en modo inmediato e inequívoco un propósito persecutorio o desviación de poder de parte de los órganos administrativos de aplicación (Fallos 288:287 consid. 10).

En el mismo orden, si bien el Alto Tribunal admitió la plena operatividad de las previsiones del art. 8 inc. 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos, norma sustancialmente análoga al art. 18 de la C.N. señaló que, pese a ello, aquellas no desplazan ni derogan las directivas del art. 15 de la ley 18.820 - del entonces vigente - art. 12 de la ley 21.864 en cuanto establecía la obligación de depositar los aportes omitidos, su – actualización monetaria, recargos e intereses para acceder a la instancia judicial, salvo que el interesado





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

afirme y pruebe que el exigido como depósito previo resulta exorbitante desproporcionado con su concreta capacidad económica. Similar temperamento fue adoptado por el Máximo Tribunal, en materia tributaria pues ha admitido la validez constitucional de la exigencia de pago previo de los tributos recargos pertinentes, como requisito de la intervención judicial, con la salvedad de supuestos de monto excepcional de falta comprobada e inculpable de los medios necesarios para enfrentar la erogación, doctrina que ha sido extendida para interpretar el art. 15, segunda parte, de la ley 18.820 (ver Fallos 215:225 501 ; 219:668; 247:181; 250:208; 256:101; 285:302; 287:101; 295:62 240; 296:40 57; 307:1753).

Que en consecuencia en tanto en el sub examine a partir de las constancias obrantes a fs. 524/549, se han objetivado los supuestos que autorizarían eximir al recurrente del depósito previo exigido por los art. 15 de la ley 18.820 y 39 bis del decreto ley 1285/58 sustituido por el art. 26 de la ley 24.463, corresponde declarar la admisibilidad formal del remedio procesal intentado.

Que en orden a la cuestión debatida en autos, surge de las constancias obrantes que, a partir del relevamiento realizado en el establecimiento de la aquí actora se determinó que las personas que se encontraban realizando tareas lo hacían en carácter de empleados de aquella.

Que en oportunidad de efectuar el descargo en los términos del procedimiento reglado por la resolución 655/05, el contribuyente sostiene su defensa en la vinculación del personal fiscalizado con la cooperativa de trabajo EXPE SUE, que alquiló el depósito de su propiedad para la realización de sus actividades, argumentos que pretendieron ser respaldados con la copia del contrato social de la firma MURO SRL, fotocopia del contrato de locación y fotocopia del cumplimiento de las obligaciones de sus dependientes.

En la resolución 26.501 el ministerio desecha la defensa intentada por cuanto considera que “las personas se encontraban prestando servicios para la requerida, conforme los datos consignados por las mismas, al manifestar fecha de ingreso, remuneración neta, actividad desarrollada y días y horario de trabajo, siendo todos estos datos suficientes para presumir la existencia de vínculo laboral”. Dicha resolución fue impugnada a fs. 198/210, presentación que fue desestimada por resolución 30.729 que motiva el recurso de apelación de fs. 300/323, que motiva la intervención de esta alzada.

Que a tenor de los agravios introducidos, no ha de pasar inadvertido que en la constancia de relevamiento corriente a fs. 1 el oficial que suscribe la misma deja expresa constancia que “En el galpón de empaque de fruta se encuentra trabajando la cooperativa de trabajo ESPE SUE LTDA. CUIT N° 30-70747979-1 domicilio 377, Cervantes. La misma realiza el servicio de empaque de temporada para terceros. La coop. le alquila el galpón. Las maquinarias y herramientas pertenecen a Muro SRL”. Asimismo consigna que fueron atendidos por Dora Elida Hernández en su calidad de presidente de la Cooperativa, quien suscribe las actas confeccionadas (y no obstante ese carácter de integrante de la cooperativa, a diferencia de todos los demás, no resulta incluida entre los trabajadores vinculados con la empresa actora, ver fs. 75/77).

A continuación se encuentran agregadas las planillas de relevamiento. En primer lugar se advierte que no han sido completadas tal como el formulario lo indica. En efecto. En vez de tachar con una X se resaltó con un círculo la opción elegida en las planillas que van de fs. 2 a fs. 14, y fs 19, en tanto que de fs. 15 a fs. 18 y fs. 20 a fs. 22, se hizo correctamente, mientras que de fs. 23 a fs. 27 directamente no se consignó información alguna; lo cual genera cierto margen de duda sobre la información asentada, por lo que la calidad de asociado se corrobora con las solicitudes agregadas a partir de fs. 224. No obstante ello, no surge de las planillas que alguno de los trabajadores hubiera señalado como empleador a Muro SRL. Por lo que la determinación de la relación de dependencia basada exclusivamente en los datos volcados en los formularios no se presenta, prima facie valorada, justificada con las restantes pruebas aportadas.

Ello así pues, no ha sido puesto en tela de juicio el vínculo existente entre la firma y la cooperativa justificado en el contrato de locación que le permitía a esta la utilización y explotación del lugar y maquinaria bajo su responsabilidad a cambio de canon mensual que no fue desvirtuado.

En ese orden, tratándose hasta aquí, de una genuina sociedad cooperativa, en cuyo funcionamiento no habría mediado fraude o irregularidad que desnaturalice sus fines, cuando es la cooperativa la que realiza la actividad, el vínculo del prestador con el tercero, ha





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

de ser cuidadosamente analizado a efecto de no desnaturalizar la finalidad que se persigue con este tipo de asociaciones.

La Resolución General 4328/97-DGI(B.O.28/4/97) ratifica que los asociados a cooperativas de trabajo legalmente constituidas y autorizadas para funcionar por el Instituto Nacional de Acción Cooperativa deberán ingresar sus aportes con destino al Régimen Nacional de la Seguridad Social como trabajadores autónomos.

Es indudable entonces que, salvo que surja manifiestamente o se demuestre la existencia de fraude laboral, no puede hablarse de relación de trabajo entre los asociados a la cooperativa y quienes contratan sus servicios. Esta apreciación se corrobora con lo dispuesto por la ley 25.877 en el artículo 40, norma que se refiere expresamente a ellas y puntualmente establece que si durante esas inspecciones se comprobare que se ha incurrido en una desnaturalización de la figura cooperativa con el propósito de sustraerse, total o parcialmente, a la aplicación de la legislación del trabajo denunciarán, sin perjuicio del ejercicio de su facultad de constatar las infracciones a las normas laborales y proceder a su juzgamiento y sanción, esa circunstancia a la autoridad específica de fiscalización pública a los efectos del artículo 101 y concordantes de la Ley N° 20.337; circunstancia que no se ha realizado en la especie por lo que sin siquiera valorar los elementos aportados no corresponde admitir la sanción impuesta.

En las condiciones ut supra referidas, la sanción impuesta sobre la base de la dogmática aplicación de los arts. 21, 22 y 23 de la LCT. carece de adecuado fundamento, por lo que ha de ser dejada sin efecto.

Por ello lo expuesto el Tribunal **RESUELVE**: 1) Declarar formalmente admisible el recurso interpuesto; 2) hacer lugar al mismo y dejar sin efecto la resolución cuestionada; y 3) sin costas en la Alzada. Por disposición del Tribunal, cúmplase con la comunicación dispuesta por la CSJN en la Acordada 15/13 (p. 4 y conc.). Protocolícese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.



#28019103#347728581#20221115135240067